

Id Cendoj: 35016340002003100075
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 0
Nº de Recurso: 8/2001
Nº de Resolución: 89/2003
Procedimiento: SOCIAL
Ponente: EDUARDO JESUS RAMOS REAL
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.

SALA DE LO SOCIAL

Las Palmas de Gran Canaria.

Plaza de San Agustín N°6.

Tfno: 928-325006

Fax: 928-325036

Tipo de procedimiento: RECURSO DE SUPPLICACION

Nº de rollo: 0000008/2001

NIG: 3500020420010000061

Materia: PRESTACIONES

Organo origen: JDO. DE LO SOCIAL N. 1 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Procedimiento origen: DEMANDA 0001067/1997

Resolución: 000089/2003

Secretaria: Dª Mª EUGENIA CALAMITA DOMÍNGUEZ

Ilmos. Sres:

D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

Dª MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D. EDUARDO RAMOS REAL

En Las Palmas de Gran Canaria a, 27 de Enero de 2003.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los Ilmos. Sres citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el rollo de suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2000, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N° 1 de los de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de juicio 1.067/1997 sobre prestaciones. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMOS REAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D^a Diana contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 28 de abril de 2000 por el JUZGADO de lo SOCIAL N° 1 de los de Las Palmas de Gran Canaria.

SEGUNDO.- En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

PRIMERO.- La actora, con fecha de nacimiento 7-12-1946, es afiliada a la seguridad social con el número NUM000, de profesión dependiente, y con una base reguladora de 60.304 pesetas mensuales. La actora cursó proceso de ILT con fecha 2-3-1992, sin que conste fecha de alta. SEGUNDO.- Con fecha 4-09-97, previa propuesta del EVI, cuyo informe médico de síntesis se emitió con fecha 29-07-1997, el cual se da por reproducido por obrar en el expediente administrativo, se denegó a la actora la declaración de invalidez solicitada, por no alcanzar sus lesiones, un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, para ser constitutivas de una incapacidad permanente. TERCERO.- La demandante padece síndrome depresivo ansioso de carácter crónico (depresión de carácter exógeno) cuyo origen está en el fallecimiento de su hijo en accidente de tráfico en 1992, de escasa respuesta a tratamiento profiláctico. Asimismo padece diabetes melitus no insulino dependiente y HTA; así como gonartrosis de carácter leve y **fibromialgia**. Del cuadro psicológico se derivan estado de tristeza e insomnio. CUARTO.- Con fecha 7 de octubre de 1997, se formula reclamación previa, con las alegaciones que constan en la misma, que se dan por reproducidas, siendo resuelta por la Entidad Gestora demandada, ratificando la resolución anterior.

TERCERO.- La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por D^a Diana contra el INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL, debiendo declarar y declarando a la actora afecta a una incapacidad permanente ABSOLUTA, con efectos económicos desde el 29-07-1997, con la prestación del 100% de la base reguladora de 60.304 pesetas mensuales, más las revalorizaciones y mejoras a que hubiere lugar, condenando a la Entidad demandada a estar y pasar por la presente resolución y a su abono.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la Entidad Gestora demandada, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la pretensión de la actora, D^a Diana y la declara afecta de invalidez permanente, grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio, dejando sin efecto la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 4 de septiembre de 1997 que, en la vía administrativa, le denegaba la solicitada prestación por considerar que las lesiones que padece no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral como para ser constitutivas de invalidez permanente en ninguno de sus grados. Frente a la misma se alza la Entidad Gestora mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que revocada la sentencia de instancia, sea desestimada la demanda.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral solicita el Instituto demandado, hoy recurrente, la modificación del relato fáctico declarado probado por el Magistrado de instancia con la finalidad de modificar el ordinal tercero, expresivo de los padecimientos y limitaciones funcionales que sufre la actora, que debería quedar redactado con el siguiente tenor literal

"La demandante padece de síndrome depresivo de carácter crónico (depresión de carácter exógeno), cuyo origen está en el fallecimiento de un hijo en accidente de tráfico en 1992, como consecuencia del cual, refiere padecer insomnio y alguna somatización, pero no se aprecia sintomatología depresiva al momento del hecho causante. Asimismo padece diabetes melitus no insulino dependiente e HTA controlada con tratamiento médico".

Basa su pretensión revisoria el Instituto recurrente en los documentos obrantes a los folios 21, 25 y

52 de las actuaciones, que contienen fotocopias de dos informes emitidos por la Dra. María Consuelo y el Dr. Carlos y de parte del informe médico de síntesis emitido por el EVI, respectivamente.

Con carácter previo la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. En primer lugar, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y sentencia del mismo Tribunal de 17 de noviembre de 1990 "...sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador..."); c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Hechas las anteriores consideraciones, obligatoriamente hemos de concluir que el motivo de revisión fáctica ha de ser rechazado por la Sala pues, en primer lugar, existiendo en el presente procedimiento varias pruebas periciales que arrojan resultados divergentes o no coincidentes, el dictamen del EVI emitido el 29 de julio de 1997 y los informes emitidos por la Doctora María Consuelo y el Dr. Carlos, han de prevalecer las conclusiones a las que el juzgador ha llegado en la valoración de tales pruebas. Y, en segundo lugar, porque lo que pretende la parte recurrente es que se realice una nueva valoración global de la prueba incorporada al procedimiento más acorde a sus intereses, basándose para ello en la consideración de los pasajes que más le interesan de los diversos informes médicos obrantes en las actuaciones, sacándolos de contexto y formando con ellos un "nuevo informe" a su medida hecho con "recortes", el cual como tal no ha sido emitido por ningún facultativo.

Todo lo cual conduce, como ya hemos dicho anteriormente al rechazo del motivo, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia la Entidad Gestora la infracción de los artículos 134 párrafo 1º y 137 párrafo 5º (en la actualidad artículos 136 párrafo 1º y 137 párrafo 1º letra c) del TR. de la Ley General de la Seguridad Social, definidor del grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que las lesiones y limitaciones funcionales que presenta la actora no alcanzan un grado suficiente como para ser constitutivas de invalidez permanente en ninguno de sus grados.

El grado de incapacidad permanente absoluta está configurado en el TR. de la Ley General de la Seguridad Social como el que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio (artículo 137 párrafo 4º, actual 137, párrafo 1º letra c del TR. de la Ley General de la Seguridad Social). La jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 9 de febrero de 1987 que ha recopilado la doctrina en tal sentido) establece que "este grado de incapacidad, teniendo presente el texto de dicho precepto que lo tipifica, sus antecedentes históricos, su espíritu y su finalidad, no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumir, con cierta eficacia, las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. A tal fin han de valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidades de iniciar y consumir a quien las sufre las faenas que corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de los que, como actividad laboral retribuida, con una y otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen" (en el mismo sentido, sentencias de 24 de febrero y 16 de julio de 1987). La jurisprudencia viene entendiendo que la declaración de invalidez permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva,

tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral (sentencia de 10 de noviembre de 1982), atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales (sentencia de 25 de enero de 1983), o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional (sentencias de 22 de enero de 1985, 24 de enero, 12 de junio y 22 de noviembre de 1989, 22 de enero, 2 de abril, 30 de junio, 20 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 1990). La determinación de tal grado de invalidez ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a apreciar conjunta o simultáneamente, de un lado, la severidad de la incapacitación y, de otro, las posibilidades reales de hallar ocupación. De tal manera que el artículo 135 párrafo 5º del TR. de la Ley General de la Seguridad Social no debe ser interpretado mediante un entendimiento literal y rígido sin más de su tenor literal, en evitación de que resulte imposible su aplicación real, y sí, por el contrario, sin perder nunca de vista la objetividad que el sentido propio de sus palabras comporta, en relación con el contexto y sus antecedentes históricos, debe actuarse dicha norma de tal suerte que su aplicación atienda fundamentalmente a alcanzar el espíritu y la finalidad que determinaron su promulgación (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio, 5 y 6 de octubre de 1981, 10 de abril, 2 de junio, 26 y 29 de noviembre, 3 de diciembre de 1984, 22 de abril, 10 y 19 de junio de 1985 y 16 y 27 de febrero, 13 de junio de 1989, 22 de enero, 7 de marzo y 11 de diciembre de 1990).

Del inalterado relato de hechos probados de la sentencia recurrida se desprende que la actora sufre, en el momento del hecho causante, los siguientes padecimientos y limitaciones funcionales (ordinal tercero)

a) en el plano fisiológico: diabetes melitus no insulino dependiente, hipertensión arterial, gonartrosis de carácter leve y **fibromialgia** ;

b) en el plano psiquiátrico: síndrome depresivo ansioso de carácter crónico y exógeno de varios años de evolución (desde 1992), ocasionado por la muerte de un hijo en accidente de tráfico, de escasa respuesta a tratamiento profiláctico, el cual le produce tristeza e insomnio.

Confrontando, pues, el cuadro clínico fisiológico y psiquiátrico que padece la actora en la actualidad con el conjunto de actividades que puede ofrecerle el mercado laboral, hemos de concluir que su patología psiquiátrica (al presentar un síndrome depresivo crónico, de varios años de evolución y rebelde al tratamiento, que le ocasiona tristeza e insomnio) le priva de la suficiente aptitud psíquica para afrontar con rendimiento, eficacia y profesionalidad el ejercicio de cualquier profesión, por liviana, sedentaria o sencilla que ésta fuera, pues con tales padecimientos está radicalmente incapacitada para relacionarse con otras personas (necesidad de relación inherente a cualquier relación laboral).

Por todo ello la Sala, al haberlo entendido así el Magistrado de instancia, considera que procede la desestimación del motivo, por su efecto del recurso y la confirmación de la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N° 1 de los de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 28 de abril de 2000, confirmando íntegramente la misma.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en la entidad de crédito BANESTO, cuenta número 3537/0000660008/2001 a nombre de ésta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del

avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital coste de una pensión de la Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 euros en la entidad de crédito BANESTO, cuenta corriente 24100000660008/2001, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, procediéndose al archivo del Rollo sin más trámite.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.